



Bolivia: la posibilidad de una sociedad poscolonial

Pilar Lizárraga

Bolivia cambió tras las elecciones de 2005 y 2006 y nunca más será la misma. Y esto es debido a una cuestión fundamental: estas elecciones cuestionaron lo profundo de un orden colonial de dominación existente desde las entrañas del Estado. Si bien durante todo el siglo XX (y también con anterioridad) la sociedad boliviana resistió de muchos modos las distintas dominaciones, fue en el 2005 cuando un indio, un sujeto colonial que representa históricamente la marginalidad y la opresión, llega a la presidencia de la República. Un acontecimiento excepcional.

Se desata así un proceso preñado de conflictos, ya que los actores del viejo orden no están dispuestos ni siquiera al juego democrático de las alternancias propias de las democracias maduras. El sistema de poder consolidado hasta ese momento percibió una amenaza a sus ancestrales privilegios y desplegó un arsenal de dispositivos como protestas, desobediencia civil, declaratorias de autonomías departamentales para no perder sus espacios. De este modo, echó mano al discurso y a los procedimientos de la democracia para disfrazar sus viejas prácticas sociales colonialistas rayanas en lo racista. Pero la consigna de la “defensa de la democracia” por parte de los prefectos insurgentes de los departamentos de “la Media Luna” encierra una trampa que el gobierno de Evo Morales está tratando de desnudar y evitar: la democracia es el gobierno de las mayorías que las minorías (respetadas) respetan, ellos (los prefectos) son minorías y tienen que aceptar las decisiones mayoritarias. Pero no lo hacen y, por el contrario, insisten en asumir la posición de víctimas.

La propuesta del gobierno nacional consiste en una sociedad de iguales, sin jerarquizaciones dadas por las razas, los orígenes sociales, el género o las posiciones económicas. Para lograrla se necesita romper un orden de más de 500 años que fue resistido con diversas intensidades: desde las rebeliones de Tupac Katari en el siglo XVIII hasta los movimientos sociales campesinos, mineros, indígenas del siglo XX y el ciclo de rebeliones que comienza con la Guerra del Agua en el 2000. Sólo en pocas ocasiones se lo hizo desde el Estado.

La propuesta mayoritaria representada, además, en la Asamblea Constituyente reside en la ruptura del orden colonial mediante el diseño de un Estado Plurinacional, Unitario (preservando la integridad territorial) y Comunitario en el cual se expresen la diversidad y pluralidad cultural. Es decir un diseño que incluye desde las particularidades de las regiones más “modernizadas” (occidentalizadas) de los departamentos en disputa hasta

las singularidades de las vastas regiones comunitarias, con fuertes cosmovisiones indígenas, campesinas, populares, urbanas (El Alto, por ejemplo), etc. Pero además este nuevo diseño supone el respeto incondicional y permanente a estos mundos mayoritarios y preexistentes, a la Bolivia mestiza.

Estas mayorías demuestran cómo es posible desde cosmovisiones y culturas políticas diferentes construir una idea de país que es capaz de incluir a todos y, a su vez, respetar las singularidades de cada uno. Sin embargo, esta construcción no es aceptada por las minorías. Estas minorías están representadas –tégase bien en claro– no por los departamentos de la Media Luna sino por sus autoridades y por parte de la población mestiza. Estos sujetos coloniales no se permiten superar sus ancestrales prejuicios sobre “el otro subalterno” (indio, campesino, minero, mujer, pobre, etc.) e insisten en mantener la iniciativa política aun a costa de perder los carriles de los procedimientos legales y democráticos.

Para estos sectores el gobierno en manos de un indio es una verdadera afrenta a lo que por años han construido y que no están dispuestos a abandonar. Sin embargo, en el siglo XXI toda América latina está mostrando transformaciones profundas y los sectores de la colonialidad del poder tienen que aceptarlo si desean seguir viviendo en democracia y paz como proponen los pueblos originarios y los sectores democráticos de la sociedad.

PILAR LIZÁRRAGA es economista miembro de la Comunidad de Estudios JAINA, Tarija y del Grupo de Desarrollo Rural (GTR) de CLACSO.

Publicado originalmente en **Página 12**
21 de Diciembre de 2007

PUNTO DE VISTA es una publicación electrónica del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP) de Río de Janeiro y Buenos Aires. En ella se divulgan textos de opinión, entrevistas y artículos breves destinados a estimular y promover el diálogo democrático. **PUNTO DE VISTA** expresa nuestra perspectiva institucional ante ciertos asuntos de actualidad en el debate público latinoamericano.

Se permite su reproducción citando la fuente y enviando copia de la publicación al Laboratorio de Políticas Públicas (LPP).

Laboratorio de Políticas Públicas

LPP-Río de Janeiro:

Rua São Francisco Xavier, 524 - Pavilhão João Lyra Filho
2º andar - Bloco F - Sala 2136
20550-013 - Rio de Janeiro - Brasil
Teléfonos / Fax: (55 21) 2565-7569 2234-1896 Ramais 24 e 25
www.lpp-uerj.net

LPP-Buenos Aires:

Tucumán 1650, 2º E (C1050AAF)
Buenos Aires - Argentina
Teléfonos / Fax: (54 - 11) 4371-4958 / 4372-2511
Mail: info@lpp-buenosaires.net
www.lpp-buenosaires.net

